

LECCIÓN 20. IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

En la LPL no existe un proceso de impugnación de convenios colectivos, sino dos. Uno, que puede calificarse de oficio, en la terminología errónea de la LPL con la que se quiere decir que se inicia por la autoridad administrativa¹, y otro en el que se concede legitimación a determinados entes colectivos. Sin embargo, los convenios colectivos no pueden ser impugnados por los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del convenio, a los cuales no les resta más que, en el proceso individual correspondiente, intentar que el convenio sea inaplicado porque el mismo sea contrario a una norma de rango superior. No se tratará, entonces, de impugnación, sino de inaplicación, que es algo diferente.

De este modo, el convenio estatutario puede ser impugnado ante la jurisdicción social en dos supuestos: **conculcación de la legalidad vigente** o **lesión grave del interés de terceros**. Dicha impugnación, a su vez, cabe canalizarse a través de dos vías, como acaba de indicarse.

- La primera, a instancias de la autoridad laboral, mediante “comunicación de oficio” librada con ocasión de los trámites de registro y depósito del convenio (art. 90.5 ET). Este precepto establece que la autoridad laboral, si aprecia aquellos vicios, “se dirigirá **de oficio** a la jurisdicción competente, la cual adoptará las medidas que procedan al objeto de subsanar supuestas anomalías, previa audiencia de las partes”. La jurisdicción competente es la social, y el proceso se desarrolla conforme a lo dispuesto en el art. 162 LPL (modalidad procesal especial).

A la autoridad laboral compete un control mediato o indirecto de la legalidad o lesividad del convenio, de tal modo que la superación de ese trámite “dota al convenio de apariencia de validez”, por lo que quien tenga interés en su impugnación debe probar los vicios que se le imputan (STS 5 de octubre de 1995, RJ 8667). La negativa de la autoridad laboral a impugnar el convenio “no legitima el ejercicio de pretensiones dirigidas a revisar el acto administrativo”, pues los interesados pueden acudir a la jurisdicción competente en defensa de sus derechos (STS 12 de junio de 1995, RJ 5964).

De no hacerlo la autoridad laboral, o de estar registrado el convenio, la impugnación puede efectuarse -siempre ante la jurisdicción social- mediante demanda de los representantes legales y sindicales de los trabajadores o los empresarios, que, en caso de que el convenio no hubiera sido registrado, deberán solicitar previamente a la autoridad laboral que ejercite aquella facultad (art. 161 LPL). El proceso se desarrolla conforme a las reglas del **proceso de conflicto colectivo** (modalidad procesal especial), y la legitimación corresponde a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, a los sindicatos y a las asociaciones empresariales “interesadas”, si es por motivos de ilegalidad, y a los terceros cuyo interés haya sido gravemente lesionado -con

¹ A pesar de que la LPL dedica un Capítulo a un denominado “procedimiento de oficio”, ha de tenerse en cuenta que no se trata de verdaderos procesos de oficio, en el sentido de que no son los órganos jurisdiccionales los que los inician, sino que la incoación depende de la autoridad laboral administrativa.

exclusión expresa de trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito del convenio-, si es por lesividad (art. 163 LPL).

La amplitud del art. 163 LPL, permite que esté legitimado para impugnar el convenio un sujeto firmante del mismo cuando se dude de su legalidad, del mismo modo que el art. 1302 Cód. Civ. admite la impugnación del contrato por las partes, aunque sea con limitaciones (STS 20 de septiembre de 2002, RJ 2003/500). Especialmente se admite esa posibilidad para la Administración pública como parte firmante de un convenio colectivo, habida cuenta que, además, el ordenamiento le permite la revisión de sus propios actos, en sede administrativa o instando la intervención judicial (STS 22 de mayo de 2001, RJ 5477). También lo puede impugnar una asociación empresarial a pesar de carecer de personalidad jurídica en el momento de constituirse la mesa negociadora (STS 15-3-2004 [RJ 2004, 4389])

Los **convenios colectivos extraestatutarios** pueden ser igualmente objeto de impugnación por esta segunda vía (art. 163.1 LPL), no por la primera (STS 4 de diciembre de 2000, RJ 2055).

Los **trabajadores** -en activo o en situación de jubilados- no pueden proceder a la impugnación directa del convenio colectivo, sino únicamente atacar los actos concretos de aplicación de esa norma, por el **proceso ordinario**, limitación que no es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, según jurisprudencia constitucional reiterada (STC 88/2001, de 2 de abril, con cita de jurisprudencia anterior). El **empresario** individual, por su parte, no está legitimado para la impugnación de convenio supraempresarial, para lo que se requiere en todo caso representación de trabajadores o de empresarios (STS 10 de febrero de 1992, RJ 960).

- La impugnación por **lesividad** a cargo de un **tercero** “requiere, para su viabilidad, la existencia de un daño con tal origen, no potencial o hipotético, sino verdadero y real, de entidad grave, no necesariamente causado con *animus nocendi*, que afectare a un interés de aquél, jurídicamente protegido, o que se le hubiera producido por quienes negociaron el convenio, usando abusivamente sus derechos o contraviniendo de otro modo el ordenamiento jurídico” (STS 15 de marzo de 1993, RJ 1859). La legitimación corresponde en este caso a los terceros lesionados en sus derechos o intereses legítimos.

Tiene la consideración de tercero a estos efectos el colegio profesional -de farmacéuticos, por ejemplo- cuando se causa daño grave a los intereses de los profesionales que representa, sin que sea necesario, para su legitimación procesal, que su ámbito de actuación se corresponda con el ámbito del convenio (STS 15 de marzo de 1993, RJ 1859). Puede serlo también una asociación profesional, o una asociación de pensionistas o jubilados, salvo que actúe en nombre de éstos y se hallen comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio; no lo son las personas comprendidas en el convenio, ni los pensionistas o jubilados que, por haber trabajado en ese ámbito, sigan afectados por el mismo (SSTS 20 de diciembre de 1996, RJ 9812, y 11 de marzo de 1997, RJ 2309). Tampoco lo son los empresarios comprendidos en el ámbito del convenio (STS 14 de mayo de 1998, RJ 4651, a propósito de empresas de trabajo temporal).

El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos (arts. 162 y 163 LPL).